



# BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

# CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

## VIII LEGISLATURA

Serie A:  
PROYECTOS DE LEY

16 de mayo de 2005

Núm. 24-7

### INFORME DE LA PONENCIA

#### **121/000024 Por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias.**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del Informe emitido por la Ponencia sobre el Proyecto de Ley por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2005.—P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Manuel Alba Navarro**.

A la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de Ley por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias (núm. expte. 121/000024) integrada por los Diputados don Alejandro Alonso Núñez (GS), doña Esperanza Ferrera Granja (GS), doña María Antonia Armengol Criado (GS), don José Madero Jarabo (GP), doña Encarnación Naharro de Mora (GP), don Pere Grau i Buldú (GC-CiU), don Jordi Ramón i Torres (GER-ERC), don Ángel Pérez Martínez (GIV-IU-ICV), don Iñaki Txueka Isasti (GV (EAJ-PNV), don Luis Mardones Sevilla (GCC) y doña Olaia Fernández Davila (GMx), ha estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento elevan a la Comisión el siguiente

### INFORME

La Ponencia ha adoptado los siguientes acuerdos en relación con el Proyecto de Ley por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias:

a) Incorporar una disposición adicional nueva, que es consecuencia del acuerdo alcanzado entre los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, de Coalición Canaria y Catalán (CiU), con respecto al texto de una enmienda transaccional. La inclusión en el Proyecto de esta nueva disposición adicional comporta la retirada de la enmienda núm. 12 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Asimismo, el Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) considera que el espíritu de la enmienda núm. 19 está recogido en la enmienda transaccional, sin perjuicio de lo cual solicita que su enmienda se mantenga para el debate en Comisión, a los efectos de hacer pública su posición en dicho debate, y explicar las razones por las que retira dicha enmienda.

b) Incorporar una enmienda transaccional por la que se da una nueva redacción a la disposición transitoria única, como consecuencia del acuerdo alcanzado entre los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso y Catalán (CiU). Sin perjuicio de la intención manifestada por el Portavoz del Grupo Catalán (CiU) de retirar sus enmiendas núm. 20, 21, 23 y 24, en la medida en que el espíritu de tales enmiendas está recogido en el texto de la enmienda transaccional, éstas se mantienen para el debate en Comisión, en el deseo de hacer público en dicho momento el acuerdo alcanzado y las razones por las que se retiran las citadas enmiendas.

c) Incorporar al texto del Proyecto de Ley las correcciones técnicas propuestas por el Letrado de la Comisión, entre las que se encuentra la incorporación de una nueva disposición final, que irá numerada como segunda, y que tendrá el contenido que figura en el Anexo.

El resto del Proyecto de Ley se mantiene sin modificaciones, quedando pendientes las restantes enmiendas para su debate en Comisión.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2005.—**Alejandro Alonso Núñez, Esperanza Ferrera Granja, María Antonia Armengol Criado, José Madero Jarabo, Encarnación Naharro de Mora, Pere Grau i Buldú, Jordi Ramón i Torres, Ángel Pérez Martínez, Iñaki Txueka Isasti, Luis Mardones Sevilla, Olaia Fernández Davila**, Diputados.

## ANEXO

### Exposición de motivos

La Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias, reguló las normas básicas aplicables a estas Corporaciones de Derecho Público.

La competencia estatal para promulgar esta ley deriva del artículo 149.1.18.<sup>a</sup> de la Constitución Española, según el cual el Estado es competente para establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Dichas bases operan únicamente como un límite para las Comunidades Autónomas, que gozan de competencia exclusiva sobre las Cámaras Agrarias, en virtud de la que la Constitución les reconoce sobre agricultura y ganadería (artículo 148.1.7.<sup>a</sup> de la Constitución), competencia que todas han asumido a través de sus Estatutos de Autonomía.

La ley establece como funciones propias de las Cámaras Agrarias las de actuar como órganos consultivos de las Administraciones Públicas, la administración de sus recursos propios y de su patrimonio y aquellas que la Administración Pública competente pueda delegarles, y, a continuación, prohíbe que las Cámaras asuman “funciones de representación, reivindicación y negociación en defensa de intereses profesionales y socioeconómicos de los agricultores y ganaderos”, cuestiones que corresponden a las organizaciones profesionales constituidas libremente.

Esta prohibición, unida a la escasa virtualidad práctica de las funciones que la ley enumera, ha determinado el papel escasamente relevante que desempeñan las Cámaras Agrarias.

En efecto, la aparición de las diversas organizaciones representativas de los intereses del sector y, muy especialmente, de las organizaciones profesionales agrarias ha devaluado la actuación de las Cámaras

Agrarias hasta el punto de que su presencia en el ámbito rural puede considerarse, en general, puramente testimonial. Solo existe una excepción a esta pérdida de relevancia: las elecciones a miembros de las Cámaras Agrarias son el instrumento de medición de la representatividad de las organizaciones profesionales.

Ello no justifica, sin embargo, el mantenimiento de esta figura, más aun teniendo en cuenta que dichas elecciones no se celebran de forma homogénea ni en todo el territorio nacional, por lo que el sistema de medición de la representatividad y, en general, el de articulación de los intereses del sector pueden ser mejorados. No se ha considerado oportuno, sin embargo, abordar esa cuestión en esta ley, sino aplazarla a una regulación posterior consensuada con las organizaciones implicadas.

A la pérdida de funciones de las Cámaras Agrarias se añade una segunda razón que aconseja proceder a la derogación de la Ley 23/1986, de 24 de diciembre. Entre las bases que esta regula, existen algunas que vienen constriñendo la capacidad de las Comunidades Autónomas para regular las Cámaras Agrarias en la forma que mejor se adecuen y puedan servir a los intereses del sector agrario en sus respectivos territorios; así, la exigencia recogida en el artículo 6 de que en cada provincia exista una Cámara Agraria con ese ámbito territorial, opción constitucionalmente legítima pero posiblemente innecesaria, o algunos de los requisitos que establecen los artículos 8 y 9 para tener la condición de elector y elegible como miembros de las Cámaras, respecto de los cuales el Tribunal Constitucional ha negado incluso que constituyan normativa básica.

De todo ello deriva que las Comunidades Autónomas hayan solicitado la eliminación de las bases estatales, para que cada una adopte las decisiones que considere más convenientes.

La ley mantiene, finalmente, la representatividad derivada de las últimas elecciones a las Cámaras Agrarias como medida transitoria hasta que se establezca un nuevo mecanismo de medición de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.

**Artículo único.** Derogación de la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias.

Se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias y se suprime la mención de estas Cámaras en el artículo 15.1 a) de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico.

**Disposición adicional única (nueva).** **Patrimonio de las Cámaras Agrarias.**

**Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Código Civil, el patrimonio de las Cámaras Agrarias que resulten extinguidas, a consecuencia**

de las disposiciones legales que pudieran aprobar las Administraciones competentes, deberá destinarse a fines y servicios de interés general agrario.

**Disposición transitoria única. Mantenimiento de la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias.**

1. Son funciones de las Organizaciones Profesionales Agrarias la representación institucional, reivindicación y negociación en defensa de los intereses profesionales y socioeconómicos de los agricultores y ganaderos.

2. En el plazo máximo de dos años, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley en el que se establezca un nuevo sistema para la determinación de la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias en el ámbito estatal.

3. Hasta que se apruebe la Ley a la que se refiere el apartado anterior, la participación de los profesionales de la agricultura se articulará a través de las Organizaciones Profesionales Agrarias, libremente constituidas, mediante procedimientos electorales.

4. Los procedimientos electorales a los que se refiere el apartado anterior habrán de regirse por las siguientes reglas:

a) Serán electores:

1.º Las personas físicas que siendo profesionales de la agricultura, ejerzan por cuenta propia la actividad agrícola, ganadera o forestal de modo directo y personal, y coticen a la Seguridad Social como consecuencia de estas actividades.

2.º Las personas jurídicas que tengan por objeto exclusivo, conforme a sus estatutos, y que efectivamente ejerzan la explotación agrícola, ganadera o forestal.

b) Corresponderá a las Comunidades Autónomas la regulación del procedimiento electoral.

c) La circunscripción electoral será la que determine cada Comunidad Autónoma.

d) Se considerarán más representativas, en el ámbito de la Administración General del Estado, las Organizaciones Profesionales Agrarias que hayan obtenido en dicho ámbito al menos el 10% de los votos válidos en los correspondientes procedimientos electorales.

e) Aquellas Organizaciones Profesionales Agrarias que tengan la condición de más representativas desarrollarán funciones de representación institucional ante las Administraciones, Entidades y Organismos de carácter público.

Disposición final primera (única del Proyecto). Fundamento constitucional.

Esta Ley se dicta al amparo de la competencia estatal sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas prevista en el artículo 149.1.18ª de la Constitución.

**Disposición final segunda (nueva). Entrada en vigor.**

La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Edita: **Congreso de los Diputados**

Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid

Teléf.: 91 390 60 00. Fax: 91 429 87 07. <http://www.congreso.es>

Imprime y distribuye: **Imprenta Nacional BOE**

Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid

Teléf.: 91 384 15 00. Fax: 91 384 18 24



Depósito legal: **M. 12.580 - 1961**